

Así por mayoría absoluta de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias que certifico. México, Setiembre doce de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por el C. Estéban Salaices, contra el presidente de la asamblea municipal de San Juan del Mezquital que ha hecho efectivo un acuerdo del ayuntamiento, en virtud del cual se privó al quejoso de un terreno de su propiedad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que desde el 17 de Junio próximo pasado se mandó al presidente municipal de San Juan del Mezquital, la copia que la ley previene, á fin de que dentro de tercero día de recibida, rindiera el informe justificado sobre lo principal de la queja del C. Estéban Salaices, á que se refiere el art. 99 de la ley orgánica de amparo; y no obstante haber trascurrido con exceso dicho término, el presidente de San Juan que en su informe de 6 de Junio trató de demostrar que no era de suspenderse la providencia reclamada, sosteniendo que debía ejecutarse por no haber en ella violación de garantías individuales y ser solo el cumplimiento de una ley general para evitar abusos y desórdenes, no

ha rendido el informe expresado; en cuya virtud el suscrito con la vista sola del ocursó del solicitante, de los documentos anexos y del precitado informe del funcionario que trataba de ejecutar la providencia reclamada, útil para llenar su deber en el caso, porque en él están de antemano asentados en corroboración los hechos que fundan la queja que motiva este juicio, va á exponer los fundamentos que en su opinion, son de tenerse presentes para otorgar el amparo solicitado. Son los siguientes:

Obra de fojas 7 á 29 el título de la merced de propiedad otorgado por el juez privativo de tierras, D. Francisco Galindo y Quiñones en 20 de Agosto de 1768 del sitio de ganado mayor de Jalpa, á lindes con los cuatro sitios menos siete caballerías fundo del pueblo de San Juan del Mezquital en favor de los naturales ó indígenas de dicho pueblo, para que lo gozaran por sí y por sus sucesores ó los que sus derechos representaran.

De tal título resulta: que aunque el sitio de Jalpa fué adjudicado en comun, lo fué solo á los naturales y no al pueblo de San Juan que ya tenia su fundo propio, bajo el concepto de no ser dichos naturales una comunidad ó corporación en cuyas manos estuvieran muertos esos bienes, sino á una reunión ó compañía de personas, que desde entonces á la fecha, han gozado por sí ó indivisamente del terreno en las partes que les han correspondido como sucesores ó adquirentes de los primeros concesionarios sin que los hayan tenido estancados, ni amortizados, sino en circulación constante, comprándose y vendiéndose, y transfiriéndose los derechos sobre ellos, por los demás títulos legales.

Por lo mismo, no puede decirse que estén comprendidos en las leyes que decretaron la desamortización de los bienes estancados; pues que ni desde su origen, ni con posterioridad fueron concegiles, ni fundo del pueblo que tenia los cuatro sitios menos siete caballerías como patrimonio del

comun, de todos y de ninguno del pueblo, y el de Jalpa por el contrario, desde su adjudicacion en 1768 fué propiedad particular de los indígenas ó naturales del mismo pueblo.

De aquí es que, aunque haya sido dictada la providencia reclamada por los motivos y para los fines que expresa el presidente municipal de San Juan del Mezquital; y aunque sea exacto que la indivision y mancomunidad de bienes, trae consigo graves inconvenientes y puede ser altamente perjudicial, ella infringe notoriamente las disposiciones de las leyes de desamortizacion, y viola ademas la propiedad de los dueños del sitio de Jalpa, por imponerles condiciones para su goce que se les concedió perfecto por el título de haco mas de un siglo, bajo la pena de perderla, y porque la condicion del denuncia del terreno que poseen, se exige para que reconozcan en favor de la municipalidad un censo, que la propiedad que tienen como los naturales sus predecesores, fué enteramente libre y sin gravámenes de censos y otros.

Y estas infracciones de la ley de 25 de Junio de 1856 y violacion de la garantía que protege y asegura el art. 27 de la Constitucion, constan plenamente en el juicio, así del ocurso de Salaices y documentos de fojas 5 y 6, como del informe del funcionario responsable de fojas 31 á 33, con que pretende sostener el despojo hecho á Salaices y del que fué inmediato ejecutor.

Por tanto, y porque legalmente el sitio de Jalpa está fuera de las prevenciones de la ley de desamortizacion por ser de particulares que lo poseen en comun, con justo y legítimo título de propiedad, entre los que se cuenta el C. Estéban Salaices, el Promotor fiscal concluye pidiendo al juzgado se sirva fallar declarando con arreglo á los artículos 101 y 102 constitucionales y ley de 20 de Enero de 1869: que la justicia de la Union ampara y protege al expresado C. Estéban Salaices, contra la pro-

videncia de la asamblea de S. Juan del Mezquital, ejecutada por su presidente, que lo echó fuera de su propiedad, por no haber consentido denunciarla como desamortizada, ni reconocer sobre ella la pension municipal que se le quiere imponer, en cuya virtud fué adjudicada á un tercero, por violarse con ello la garantía que protege el art. 27 de la Constitucion general.

Así lo entiendo de justicia, protestando etc.

Zacatecas, diez y ocho de Julio de mil ochocientos setenta y uno.. (Firmado.)—
Jesus M. Licona.

Sentencia del Juzgado de Distrito.

Zacatecas. Agosto diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por el C. Estéban Salaices, contra los hechos del C. presidente municipal de San Juan del Mezquital, por los cuales le quitó la posesion y propiedad de un terreno perteneciente al sitio de Jalpa, cumpliendo con el acuerdo de la asamblea municipal del mismo lugar por el que se mandó enagenar el expresado sitio, conforme á las leyes de desamortizacion, y principalmente por la circular de 9 de Octubre de 1856, alegando Salaices en su ocurso, que los terrenos son de su propiedad, y que el repetido sitio no puede considerarse comprendido en la ley de desamortizacion porque no hay comunidad, y fué adjudicado á las familias de los indígenas de San Juan del Mezquital y á sus sucesores, juzgando violada por esto en su persona la garantía que protege el art. 27 de la Constitucion general de la República. Visto el informe rendido por la autoridad ejecutora de los actos por los que se pide amparo para resolver sobre la suspension provisional, en el que se expresa, que el sitio de Jalpa pertenece á la municipalidad, y el valor del enfiteusis, resultado

de las enagenaciones parciales, está comprendido en los arbitrios municipales aprobados por autoridad competente, sosteniendo que la enagenacion debe hacerse conforme á las leyes de desamortizacion. Visto el pedimento del C. Promotor fiscal fecha 16 de Junio último, en el que pide se suspendan provisionalmente los actos reclamados por el C. Estéban Salaices, fundándose en que los referidos actos traen gravámen irreparable. Vistos el auto de la misma fecha en que se suspendió provisionalmente el acuerdo de la asamblea municipal de San Juan del Mezquital, llevado á efecto por su presidente; el pedimento del C. Promotor fiscal de fecha 18 del mes próximo pasado, en el que sostiene conforme á los artículos 101 y 102 de la Constitucion general y ley de 20 de Enero de 1869, que debe concederse el amparo por haberse violado la garantía que protege el art. 27 de la citada Constitucion, por ser los bienes de propiedad particular y no de comunidad. Visto el informe sobre lo principal rendido por el mismo C. presidente municipal de San Juan del Mezquital, fecha 5 de Julio último y que fué recibido en este juzgado el 21 del propio mes, en el que insiste en lo expuesto en su primer informe, y en que Salaices ha extraído los títulos del sitio de Jalpa de la gefatura política de Nieves, así como la falsedad del documento presentado á fojas 6. Vistos el auto de 20 de Julio citado por el cual se mandó abrir el juicio á prueba; los títulos de 20 de Agosto de 1768 que corren de fojas 7 á 29 de los autos y los documentos presentados por el C. Cruz García Rojas como apoderado de Salaices, que constan de fojas 45 á 53. Visto el auto de 3 del corriente en que se citó para sentencia y todas las demas constancias que ver convino.

Considerando: que Salaices ha justificado que el sitio de Jalpa es de la propiedad particular de las familias de los indígenas de San Juan del Mezquital y de sus sucesores, pues expresamente dice el título de

adquisicion á fojas 28. *“Por tanto y en conformidad de lo determinado en el auto que antecede: Acordé librar el presente, por el cual, usando de la facultad que me es conferida, en nombre de su Magestad, hago adjudicacion en forma á los naturales del pueblo de San Juan Bautista del Mezquital, del sitio de ganado mayor nombrado Jalpa que resultó realengo á los lindes de dicho su pueblo sin servicio alguno del Real Erario, y les amparo, mantengo y conservo en el uso, y goce de los cuatro sitios de ganado mayor menos siete caballerías, que por razon de fundo gozan, bajo los términos y linderos que quedan expresados; para que como legítimos dueños de él, mediante este título, lo usen y gocen como les convenga y por bien tuvieran, poblando de ganados mayores ó menores, sembrándolo, cultivándolo, permutándolo, arrendándolo, ó vendiéndolo como mejor le parezca bajo la precisa calidad de contenerse en los linderos referidos sin propasarse á ocupar mas tierra de la que conforme á esta adjudicacion les está concedida, á cuyo fin mando pongan luego mojoneras de piedra y cal, con asistencia del juez Real del partido y por presencia de los lindantes que hubiere en los límites asignados para que de esta suerte guarden la sujecion que se les previene en sus propios linderos, en inteligencia de que lo han de tener poblado ó en cualquier otra forma ocupado con la labranza y crianza de ganados»* todo lo cual se corrobora con la lista nominal de las familias del pueblo de San Juan del Mezquital formada el año de 1703 constante de fojas 45 á 48 de este expediente y con las comunicaciones del gobierno de este Estado fecha 16 de Abril de 1824 y 17 de Agosto de 1838, fojas 49, 50 y 51, en que se declara de propiedad particular el repetido sitio de Jalpa.

Considerando: que si la asamblea municipal de San Juan del Mezquital tiene los derechos que expresa el C. presidente en sus informes, á nadie le está permitido ha-

corse justicia á sí mismo y como dice el art. 17 de la Constitucion general, nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho, cuyos principios ha hollado la asamblea municipal resolviendo por sí y ante sí la cuestion sobre la propiedad de los terrenos del sitio de Jalpa, desposeyendo á los indígenas ó á quienes sus derechos representan y enagenándolos á terceras personas bajo el pretexto de cumplir con las leyes de desamortizacion y con el objeto de conservar el orden público que frecuentemente se altera por la comunidad que supone tienen los indígenas en el repetido sitio de Jalpa.

Considerando: que el acuerdo de la asamblea municipal de San Juan del Mezquital y su ejecucion hecha por el C. presidente de la municipalidad, viola la garantía que protege el art. 27 de la Constitucion general de la República, privando á los indígenas de la posesion y propiedad de sus terrenos sin su consentimiento, sin causa de utilidad pública y previa indemnizacion, condenándolos ademas sin oírlos sobre los derechos que alegan y representan.

Considerando: que aunque es notorio que los documentos presentados por Salaices pertenecen á la gefatura política de Nieves sin saberse de qué medios se ha valido para presentarlos en juicio, esto no les quita su fuerza y validéz, careciendo el juzgado de facultades para proceder en su contra por la falta ó delito que haya cometido, así como tampoco tiene jurisdiccion para resolver la falsedad del documento presentado por el mismo Salaices á fojas 6. Atendiendo á los fundamentos expuestos, á lo pedido por el C. Promotor fiscal, y de conformidad con lo prevenido en el art. 13 de la Constitucion general y en los artículos 1º, 2º, 13 y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869, sentenciando definitivamente este juicio, el juzgado declara:

Primero; Que la justicia de la Union protege y ampara al C. Estéban Salaices contra el acuerdo de la asamblea municipal

de San Juan del Mezquital ejecutado por su presidente, por el que fué despojado de la propiedad y posesion que el expresado Salaices tiene en el sitio de Jalpa, y que fué adjudicado al *al secretario de la misma Asamblea C. Ramon Chavez*, por haberse violado con el acuerdo y su ejecucion la garantía que protege el art. 27 de la Constitucion general.

Segundo; se advierte al C. Promotor fiscal que al pedir sobre la suspension provisional en los juicios de amparo, no alegue el gravámen irreparable que es una razon propia para admitir las apelaciones, pero que no corresponde á dichos juicios, en atencion á que puede existir tal gravámen sin que haya violacion de garantías individuales, ni urgencia para suspender las providencias contra las que se pida amparo.

Tercero; quedan á salvo los derechos de la asamblea municipal de San Juan del Mezquital para que los deduzca ante los tribunales competentes sobre los que creo tener del sitio de Jalpa, y para pedir el castigo correspondiente contra Salaices por el uso que ha hecho de los documentos que pertenecen al archivo de la gefatura política de Nieves, y por la falsedad que se dice ha cometido al presentar el documento de fojas 6.

Hágase saber, publíquese esta sentencia en el periódico oficial del Estado y remítanse las copias respectivas al Semanario Judicial, así como este expediente para su revision á la Suprema Corte de Justicia. El C. Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó. Doy fé. (Firmado.)—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre cuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido an-

te el juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Estéban Salaices, contra el presidente de la asamblea municipal de San Juan del Mezquital, que ha hecho efectivo un acuerdo del ayuntamiento, en virtud del cual se le privó de un terreno de su propiedad, perteneciente al sitio de Jalpa, adjudicándosele al secretario del referido ayuntamiento conforme á las leyes de reforma, alegando el peticionario que con esta providencia se violan en su persona las garantías que otorga el art. 27 de la Constitución general de la República. Vistas las constancias de autos y

Considerando: que el promovente ha presentado al juzgado de Distrito que conoce del recurso, los títulos primordiales que acreditan la propiedad particular del terreno del cual está en quita y pacífica posesión: que la autoridad ejecutora no contradice los hechos, pero alega que la asamblea municipal ha fundado su acuerdo en que dichos terrenos los considera como pertenecientes al municipio y amortizados por el pueblo en comun, debiendo en consecuencia procederse á cumplir con la circular de 9 de Octubre de 1856.

Considerando: que si los títulos de propiedad particular en virtud de los cuales vienen conservando separadamente la tenencia como propiedad particular por mas de un siglo los vecinos de San Juan del Mezquital, entre los que se encuentra el peticionario, adolecen de algun vicio, la asamblea tiene su derecho á salvo para hacerlo valer en la vía y forma prescrita por las leyes; con fundamento del art. 27 de la Constitución federal se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Zacatecas, que declaró en nombre de los poderes de la Union que amparaba y protegía al peticionario contra el acuerdo de la asamblea municipal de San Juan del Mezquital ejecutado por su presidente, por el que fué despojado de la propiedad y posesión que el expresado Salaices tiene en el sitio de

Jalpa, y que fué adjudicado al secretario de la misma asamblea C. Ramon Chavez, por haberse violado en el acuerdo y su ejecución la garantía que protege el art. 27 de la Constitución general.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de este fallo, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*P. Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—J. M. Lafragua.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Altamirano.—Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Setiembre veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por Mauricio Victoria y Atanacio Carrera, por violacion de las garantías que otorgan los artículos 13, 20 y 21 de la Constitución federal.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 1º suplente de Distrito:

Una ley de suspension de garantías es la mas antilógica en cualquier pais y en cualquier tiempo; pero mas en el actual, en que los derechos del hombre se tienen como el principio fundamental de todo código político, y la alteracion ó trasgresion de tan sagrado principio es insostenible ante toda moral, contrario á todas las leyes, digo nociones de justicia, y sin explicacion posible